

Los comunes bajo disputa digital

Capitalización de datos, selectividad estatal y prácticas de comunización en América Latina

Juan Guijarro

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.

<https://orcid.org/0009-0005-9756-6899>

juanguijarroh@hotmail.com

Fecha de recepción: 23/3/2026
Fecha de aceptación: 21/5/2026

Resumen

Este artículo examina cómo la capitalización contemporánea se expande, a través de tecnologías digitales, sobre nuevas dimensiones de la vida social y, en particular, sobre los comunes que sostienen su reproducción ecosocial. Su argumento central es que, en América Latina, la captura digital no opera solo como tendencia macro-económica, sino mediante mediaciones jurídico-políticas e infraestructurales que estabilizan de manera desigual la subordinación de datos, territorios, cuidados, comunicación y cooperación a circuitos de valorización. A partir de una comparación entre seis países y varios casos situados, el texto muestra que las variaciones estatales importan porque pueden habilitar, precarizar o bloquear procesos de comunización.

Tramas
y Redes
Jun. 2026
Nº10
ISSN
2796-9096

Palabras clave

1| comunes 2| capitalización digital 3| selectividad estatal 4| prácticas de comunización
5| América Latina

Cita sugerida

Guijarro, Juan (2026). Los comunes bajo disputa digital: capitalización de datos, selectividad estatal y prácticas de comunización en América Latina. *Tramas y Redes*, (10), 45-60, 10ab. 10.54871/cl4c10ab



Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución- NoComercial- CompartirIgual 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR

Os comuns sob disputa digital: capitalização de dados, seletividade estatal e práticas de comunização na América Latina

Resumo

Este artigo examina como a capitalização contemporânea se expande, por meio de tecnologias digitais, sobre novas dimensões da vida social e, em particular, sobre os comuns que sustentam sua reprodução ecossocial. Seu argumento central é que, na América Latina, a captura digital não opera apenas como tendência macroeconômica, mas também por meio de mediações jurídico-políticas e infraestruturais que estabilizam, de maneira desigual, a subordinação de dados, territórios, cuidados, comunicação e cooperação a circuitos de valorização. A partir de uma comparação entre seis países e vários casos situados, o texto mostra que as variações estatais importam porque podem habilitar, precarizar ou bloquear processos de comunização.

Palavras-chave

1| comuns 2| capitalização digital 3| seletividade estatal 4| práticas de comunização
5| América Latina

The commons under digital dispute: data capitalization, state selectivity, and commoning practices in Latin America

Abstract

This article examines how contemporary capitalization expands, through digital technologies, into new dimensions of social life and, in particular, into the commons that sustain its ecossocial reproduction. Its central argument is that, in Latin America, digital capture operates not only as a macroeconomic trend, but also through juridical-political and infrastructural mediations that unevenly stabilize the subordination of data, territories, care, communication, and cooperation to circuits of valorization. Based on a comparison across six countries and several situated cases, the article shows that state variations matter because they can enable, precarize, or block processes of commoning, and concludes by proposing a juridical-institutional opening oriented toward the reproduction of life.

Keywords

1| commons 2| digital capitalization 3| state selectivity 4| commoning practices
5| Latin America

La disputa digital por la vida: entre promesa tecnológica y captura de lo común

En las últimas décadas, la capitalización ha avanzado sobre zonas de la vida social que durante la gran expansión industrial permanecían, al menos en parte, fuera de su captura directa. No ha dejado de subsumir trabajo y naturaleza; pero ha ensanchado el radio de la extracción. Plataformas, infraestructuras de nube, sistemas de identificación, dispositivos móviles, sensores, arquitecturas de interoperabilidad y automatizaciones diversas operan hoy como máquinas de traducción: convierten desplazamientos, consumos, comunicaciones, cuidados, hábitos, territorios y cooperaciones ordinarias en marcas registrables, combinables y calculables, aptas para su valorización ulterior (Couldry y Mejías, 2019, pp. 3-6). Lo decisivo no es, por tanto, la novedad técnica en sí, sino el hecho de que la vida humana y no humana deje de comparecer solo como fuerza de trabajo o recurso extractivo, y pase a ser capturada también como flujo continuo de información, anticipación y conducta (Rouvroy y Berns, 2013, pp. 163-166).

En América Latina, este desplazamiento adopta una forma especialmente intensa. Se injerta sobre economías dependientes, infraestructuras desiguales, marcos regulatorios fragmentarios y soberanías atravesadas por proveedores de servicios, plataformas y estándares cuyo centro de decisión se encuentra, por regla general, fuera de la región. De ahí que la retórica neoliberal –más eficiencia, más conectividad, más inclusión, más transparencia– deba leerse junto con su reverso menos visible: una nueva ronda de apropiación de capacidades sociales y territoriales, ahora bajo la forma de datos, protocolos, modelos y servicios indispensables (Guerra González, Suárez Estrada y Cerratto-Pargman, 2022, pp. 227-230).

Este movimiento no surgió en el vacío. Desde la crisis de acumulación de mediados de la década de 1970, y frente al deterioro de la rentabilidad en las economías centrales, el neoliberalismo se consolidó como estrategia de recomposición de la ganancia mediante desregulación, privatización, financiarización, reconcentración del capital y expansión desigual de nuevas fronteras de explotación, primero sobre trabajo y naturaleza, y luego, de manera cada vez más decisiva, sobre informaciones, conductas, vínculos y capacidades cooperativas (Harvey, 2005, pp. 19-31; Duménil y Lévy, 2011, pp. 4-12).

Si la capitalización contemporánea avanza ya no solo sobre la producción inmediata, sino también sobre las condiciones de reproducción de la vida ecosocial, entonces lo que entra en disputa no es un mero recurso, sino los entramados mismos de interdependencia que sostienen la existencia colectiva: es decir, los comunes (Vega Solís, 2019, pp. 49-53).

Pero conviene distinguir entre los comunes como concepto sustantivo – social, político y eventualmente jurídico– y la comunización como proceso material de cooperación, cuidado, conectividad, territorialidad y saber compartido. La primera remite a una forma; la segunda, a un hacer. Y ese orden importa, porque el capital no produce desde cero las tramas que luego valoriza: se superpone a ellas, las explota y, con frecuencia, las degrada hasta volver inciertas las propias condiciones de reproducción de la vida (Couldry y Mejías, 2019, pp. 83-86).

Este artículo parte de ese diagnóstico de economía política, pero sitúa su foco en el nivel meso de las mediaciones jurídico-políticas, institucionales e infraestructurales donde las transformaciones estructurales de la acumulación se articulan con sus efectos sobre la vida cotidiana. La hipótesis es doble: por un lado, que estas mediaciones participan activamente, en América Latina, en la organización de una captura ampliada de la vida social; por otro, que esa misma mediación no clausura por completo el campo de lo posible, pues en sus fricciones y límites subsisten procesos de comunización capaces de abrir paso a formas institucionales no enteramente subordinadas. Para examinar esta tensión, se reconstruye la inserción latinoamericana en la nueva economía política de la extracción informacional (sección 2); luego se propone un diseño comparativo y la articulación entre escalas macro, meso y micro (3) para examinar después cómo las mediaciones jurídico-políticas y estatales funcionan como infraestructura de captura (4); lo que permitirá evaluar qué formas de Estado habilitan, precarizan o bloquean procesos de comunicación (5), para finalmente cerrar con una conclusión propositiva.

Capitalización de datos, colonialismo y dependencia

Conviene despejar, desde el inicio, un error de método: los comunes no aparecen como residuo tardío de la capitalización ni como reacción moral a sus devastaciones. La capitalización no crea las tramas de interdependencia sobre las que opera; se superpone a ellas, las reorganiza y las vuelve rentables. Por eso la distinción entre comunes y comunización no es nominal: los primeros nombran una forma social y política de organización de lo compartido; la segunda, el proceso material por el que la vida se sostiene en circuitos de cooperación, cuidado, reciprocidad, saber situado y uso común de infraestructuras y territorios.

La novedad de la fase actual no consiste en que el capital haya “descubierto” el dato, sino en que ha cerrado un circuito más denso entre extracción, almacenamiento, modelización y retroalimentación conductual: la digitalización ya no solo registra actividad, sino que integra bases heterogéneas, las vuelve interoperables y las devuelve a la vida social como

perfiles, alertas, predicciones y umbrales de riesgo (Lehuedé, 2024, pp. 9-10). La captura deja así de parecerse a la vieja apropiación de un recurso externo y se aproxima a una reingeniería de la reproducción social, donde trabajo, movilidad, cuidado, consumo, crédito, seguridad o asistencia estatal pasan a leerse dentro de una misma gramática infraestructural; en el plano de la seguridad, ello se advierte en plataformas que no solo reúnen información dispersa, sino que producen capacidades de clasificación y decisión anticipatoria en el corazón mismo de la administración pública, como muestran tanto los análisis sobre Palantir como los estudios sobre regulación de plataformas de análisis de datos en seguridad pública (Ulbricht y Egbert, 2024, pp. 1-3; Iliadis y Acker, 2022, pp. 334-338).

En América Latina, esta reconfiguración avanza bajo presión geopolítica explícita. El *National Trade Estimate Report* de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos identifica barreras que afectan también al *electronic commerce* y las presenta como obstáculos a remover en función de los intereses económicos y de seguridad estadounidenses (United States Trade Representative, 2025, pp. 1-3); el capítulo digital del T-MEC traduce esa orientación en reglas que restringen la localización de datos e instalaciones de cómputo, protegen código fuente y algoritmos y promueven el uso reutilizable de información gubernamental abierta (United States Trade Representative, 2020, pp. 5, 8-10).

A ello se suma una segunda capa, menos visible y no menos decisiva: la securitización algorítmica. La región importa no solo como mercado, sino como laboratorio de clasificación social, donde la promesa de eficiencia estatal y seguridad habilita dispositivos más intrusivos de vigilancia y administración diferencial de poblaciones; por eso el campo ya no remite solo a Big Tech, sino también a proveedores de analítica, contratistas de ciberseguridad y firmas de *spyware* con fuertes conexiones estatales. La CIDH advirtió en 2024 la persistencia de abusos de vigilancia digital, incluido el uso de Pegasus contra periodistas y sociedad civil en México, y Derechos Digitales mostró hasta qué punto la compra de Pegasus en Colombia volvió visible la presencia de proveedores israelíes y de acuerdos opacos de alta sensibilidad política (Ricaurte, Gómez-Cruz y Siles, 2024; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2024, pp. 8-9; Derechos Digitales, 2024, p. 10).

Lo que está en juego, por tanto, no es un simple debate normativo sobre bienes compartidos, sino si las condiciones mismas de reproducción de la vida –comunicación, movilidad, identificación, cuidado, acceso a servicios, memoria social, gestión territorial– quedan absorbidas por un entorno de plataformas, nubes, contratos de servicio, cláusulas de libre flujo y dispositivos de clasificación preventiva cuyo centro de gravedad técnico y político se localiza fuera de la región. En ese contexto,

la comunización no desaparece; cambia de estatuto: ya no designa solo prácticas comunitarias de proximidad, sino también esfuerzos por sostener conectividad, conocimiento, coordinación y autonomía allí donde la capitalización pretende monopolizar la infraestructura de lo social.

La forma Estado como campo de batalla: casos y escalas

Si, como se sostuvo en la sección anterior, la captura contemporánea avanza a la vez como presión geoeconómica, ensamblaje infraestructural y reorganización cotidiana de la vida ecosocial, entonces describir un solo nivel del problema sería, además de insuficiente, engañoso. Hace falta un diseño capaz de seguir sus conexiones sin aplanarlas en una secuencia lineal.

De ahí la necesidad de comparar: no para ordenar países en un *ranking* ni para extraer de ellos una moraleja institucional demasiado rápida, sino para observar configuraciones, esto es, combinaciones variables de capacidad pública, dependencia infraestructural, capitalización del dato y apertura –o cierre– frente a procesos de comunización. En esa clave, la comparación no persigue “efectos netos” aislados, sino regularidades relacionales dentro de un universo acotado; por eso el diseño se aproxima, con cautela, a un esquema de sistemas más similares corregido por sensibilidad configuracional: casos lo bastante próximos para que la comparación tenga sentido, pero lo bastante distintos para que no se vuelva tautológica (Ankar, 2008, pp. 389-391; Greckhamer, Furnari, Fiss y Aguilera, 2018, pp. 487-488).

El universo principal se delimita, así, por dos criterios: Estados latinoamericanos con arquitectura nacional de gobierno digital y un nivel de desarrollo socioeconómico que evite tanto la heterogeneidad extrema como la falsa homogeneidad. Dentro de ese marco, la selección prioriza seis casos: Brasil, México, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador. Los primeros cinco se eligen porque figuran entre los desempeños más altos del Índice de Gobierno Digital OCDE/BID 2023; Ecuador entra como contraste dentro del mismo espacio regional y, además, aparece entre los mejores en la dimensión *user-driven*. La muestra, por tanto, no pretende “representar” a América Latina, sino cubrir variaciones significativas sin romper el campo de comparación (OCDE/BID, 2024, pp. 3, 12-13, 23).

Pero comparar sin fetichizar al Estado exige también no disolverlo. El Estado no desaparece del análisis; simplemente deja de ocupar el lugar de causa autosuficiente. De ahí que el artículo distinga tres escalas: la sección 4 examina las presiones macro y las mediaciones meso –la geoeconomía política de la captura, pero también los contratos de nube, los sistemas de identificación, las compras públicas, la interoperabilidad y

los arreglos regulatorios que la vuelven operativa y durable-; la sección 5, en cambio, desciende a la escala micro, no como suplemento etnográfico, sino como plano indispensable para observar las relacionalidades concretas de la vida ecosocial sobre las que esa captura se monta y contra las que tropieza. La razón de esta división es simple: si en la escala macro se advierte la presión estructural y en la micro los comunes constituyentes, es en el nivel meso donde ambas se articulan, se traducen y, a veces, se fisuran.

Plataformas, nube y seguridad: mediaciones estatales de la captura

Como la sección anterior mostró que la capitalización contemporánea se superpone a procesos previos de comunización, el paso siguiente consiste en examinar por qué dispositivos esa superposición deja de ser mera tendencia y adquiere consistencia institucional. No basta, en efecto, con hablar de plataformas en abstracto: la captura se vuelve durable cuando se condensa en una malla de tratados, centros de datos, servicios en la nube, sistemas de identidad, arquitecturas de interoperabilidad y plataformas de análisis que enlazan presiones macro con decisiones administrativas concretas. Lo que emerge de ese tránsito es menos un “Estado digital” soberano que un Estado crecientemente acoplado a infraestructuras corporativas cuya materialidad –energética, logística, jurídica y semántica– desborda el vocabulario benévolo de la modernización; la nube deja de ser metáfora ligera y el dato, una vez extraído, se convierte en insumo clasificatorio, criterio anticipatorio y, llegado el caso, tecnología de sospecha (Brodie, 2023; Kotliar y Gekker, 2024, pp. 2566-2569).

Ese acoplamiento se verifica también en la escena política de los centros de mando. Los registros de la *Federal Election Commission* muestran millonarias donaciones a la campaña de Donald Trump por parte de Amazon, Meta y Microsoft entre diciembre de 2024 y enero de 2025, mientras un simposio especial convocado por Xi Jinping el 17 de febrero de 2025 reunió a directivos de Huawei, BYD y Xiaomi bajo una agenda explícita de innovación tecnológica y modernización industrial (Trump Vance Inaugural Committee, 2025, pp. 9, 188-190; Xinhua, 2025). Más decisiva aún es la base material de esa convergencia: Omdia estimó que el gasto mundial en infraestructura de nube alcanzó USD 90,9 mil millones en el primer trimestre de 2025, con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud concentrando 68% del mercado global, mientras la OECD advirtió que en algunas de las mayores economías Amazon y Microsoft llegan conjuntamente hasta 80% de cuota, en mercados marcados por altas barreras de entrada y fuertes mecanismos de *lock-in* contractual y técnico (Omdia, 2025; OECD, 2025, p. 9). La expansión reciente de la inteligencia

artificial no hace más que profundizar esta estructura: entrenamiento, inferencia y provisión de modelos empujan a empresas y gobiernos a migrar datos y procesos críticos hacia infraestructuras cuya escala energética, logística y computacional solo unos pocos actores controlan.

Tabla 1. Configuraciones estatales de captura digital

País	Vector estatal dominante	Mediación infraestructural central	Riesgo principal	Fisura o margen relativo
México	Centralización tecnológica con lenguaje de soberanía	NubeMx, ciberseguridad y compras tecnológicas coordinadas	Soberanía jurídicamente encauzada y abierta a dependencia externa	Recuperación parcial de capacidades públicas
Brasil	Soberanía digital híbrida	Nuvm de Governo operada por Serpro/ Dataprev y articulada con soluciones de mercado	Hibridación entre control público y dependencia de proveedores globales	Mayor control territorial de datos sensibles
Colombia	Interoperabilidad y analítica bajo tercerización	Lago de datos y nube pública Azure	Profundización de dependencia corporativa en capa analítica	Capacidad de gobierno de datos en expansión
Perú	Integración administrativa de servicios estatales	PIDE e intercambio seguro entre entidades	Expansión funcional con baja autonomía infraestructural	Plataforma estatal relativamente consolidada
Ecuador	Transformación digital orientada a atracción de inversión	Interoperabilidad, servicios públicos digitales y economía digital global	Apertura regulatoria favorable a captura externa	Posibilidad de reorientación institucional aún abierta
Uruguay	Alta densidad pública relativa	Protección de datos fuerte y coordinación estatal más robusta	Dependencia menos visible, pero no ausente, de capas externas	Mayor capacidad regulatoria y legitimidad internacional

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE/BID (2024) y en documentos oficiales.

Sobre ese trasfondo, los seis casos latinoamericanos no dibujan una jerarquía lineal, sino una gama de configuraciones estatales. México expresa la forma más nítida de la tensión: Nube MX se presenta como infraestructura pública, interoperable y soberana (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, 2025a), pero nace dentro de un marco jurídico transfronterizo que restringe de antemano los márgenes de localización, control y cierre soberano (United States Trade Representative, 2020, pp. 5, 8-10), de modo que la reconstrucción de capacidades públicas queda jurídicamente encauzada (Presidencia de la República, 2025).

Brasil ofrece una figura distinta: la Nuvm de Governo, gestionada por Serpro y Dataprev, refuerza la custodia pública de datos sensibles (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2025), pero el contrato de Anatel con un servicio de Broker MultiCloud muestra que esa apuesta recompone la dependencia bajo una forma híbrida antes que abolirla (Agência Nacional de Telecomunicações, 2026).

Colombia, Perú y Ecuador comparten, con variaciones, otra lógica de acoplamiento: en Colombia, el PETI consolida el lago de datos institucional sobre Microsoft Azure (Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, 2025, pp. 58-59); en Perú, la PIDE articula servicios en línea e intercambio seguro de información (Presidencia del Consejo de Ministros, 2025a; Presidencia del Consejo de Ministros, 2025b); en Ecuador, la transformación digital se enlaza explícitamente con atracción de inversión, interoperabilidad y ciberseguridad (Gobierno del Ecuador, 2023, arts. 1 y 25; Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2025, pp. 12-16). En los tres casos, la digitalización estatal se densifica mientras la infraestructura decisiva permanece parcial o ampliamente tercerizada.

Uruguay, por último, marca el punto de mayor densidad pública relativa: la ratificación europea de 2024 sobre su nivel adecuado de protección de datos indica una capacidad más consolidada para articular gobierno digital, tutela de datos personales y legitimidad regulatoria (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, 2024), aunque sin resolver del todo el problema infraestructural de quién aloja, procesa, integra y audita las capas estratégicas de la vida digitalizada.

La comparación, en suma, no opone autonomía y subordinación en términos puros, sino configuraciones distintas de soberanía jurídicamente encauzada, soberanía híbrida, interoperabilidad dependiente y mayor densidad pública relativa. Con ello queda fijado el plano macro-meso de la captura; la sección siguiente desciende a la escala micro, donde esa arquitectura se apoya, se reproduce y también encuentra sus límites.

Contra la captura: selectividad estatal y prácticas de comunización

Si la sección anterior examinó las mediaciones estatales e infraestructurales que vuelven durable la captura, aquí interesa su reverso: qué prácticas de comunización –cooperación, cuidado, uso compartido, pertenencia territorial, comunicación en lengua, trabajo común– logran subsistir y bajo qué condiciones. La escala micro no importa por su tamaño, sino porque allí se vuelven visibles criterios prácticos de valor que la capitalización necesita para operar, pero no puede producir por sí sola.

Por eso esta sección no “corrige” desde fuera el argumento previo: lo completa, al mostrar cómo la selectividad estatal –normas, instituciones, diseños regulatorios, incentivos y soportes materiales– habilita ciertas formas de vida, apenas tolera otras y bloquea o precariza muchas más. Si la sección 4 analizó la selectividad estatal a favor de la captura, aquí se examinan las condiciones bajo las cuales valores como la reciprocidad, el control colectivo, la ayuda mutua, la continuidad territorial y el uso común de la infraestructura logran –o no– adquirir duración social e incluso reclamar traducción institucional.

Tabla 2. Selectividad estatal y condiciones de comunización

País	Experiencia	Marco jurídico-político	Habilita	Impide	Traducción institucional sugerida
México	Boca de Polen y radios comunitarias e indígenas en Chiapas	Reconocimiento parcial de medios comunitarios; acceso inestable a infraestructura y financiamiento	Uso comunal de la comunización, programación en lengua, control territorial de contenidos	Sostenibilidad débil y asimetría frente a medios comerciales	Reserva efectiva de espectro, fondos no competitivos, control colectivo de fines y gestión
Brasil	Tecnologías de propiedad obrera y cooperativismo de plataforma	Figuras cooperativas disponibles, sin política robusta de compras, crédito o apoyo técnico	Autogestión técnica, propiedad colectiva, prioridad a seguridad y dignidad del trabajo	Presión competitiva, baja escala y financiamiento frágil	Contratación pública preferente, crédito y régimen tributario para plataformas de propiedad colectiva
Colombia	Drivers Club Bogotá	Vacío regulatorio sobre trabajo de plataformas y baja protección laboral	Redes de apoyo, autorregulación, coordinación desde abajo	Informalidad, dependencia de plataformas, ausencia de derechos colectivos claros	Derechos de asociación digital, acceso a datos operativos, estatutos laborales híbridos
Ecuador	La Voz de la CONFENIAE	Adjudicación de frecuencia y reconocimiento de medios comunitarios, con financiamiento limitado	Comunicación bidireccional, participación y continuidad territorial	Sostenibilidad precaria y débil soporte público	Financiamiento no clientelar, reserva de espectro y reconocimiento multilingüe
Uruguay	Cooperativas de vivienda por ayuda mutua e IATs	Ley de vivienda, propiedad colectiva, topes a honorarios y subsidio público al trabajo cooperativo	Ayuda mutua, anti-especulación, acompañamiento técnico sin absorción	Límites de escala y dependencia de apoyos públicos	Asistencia técnica protegida, lucro acotado y diseño institucional orientado al uso y no a la especulación
Perú	Inclusión digital en Tayacaja, Huancavelica	Políticas de acceso con infraestructura y capacidades insuficientes	Persistencia de tramas comunitarias locales	Conectividad débil, brechas docentes y falta de soporte material	Inversión territorial sostenida, formación bilingüe y derechos de infraestructura básica

Fuente: Elaboración propia con base en Manjarrez (2023), Grohmann (2023), Paredes y Vigliola (2024), Tapia, Simpson y Smith-Morris (2024), Valitutto y De Souza Lopez (2024) y Mescua Figueroa, Vértiz-Osores, Mendoza Torres y Peceros Mescua (2024).

La comparación no opone un afuera puro al capital a una captura total, sino formas estatales distintas y, con ellas, destinos desiguales de la comunización. En México y Ecuador, el reconocimiento jurídico abre espacio a medios comunitarios e indígenas, pero sin asegurar plenamente su sostenibilidad material. En Chiapas, radios articuladas en torno a Boca de Polen sostienen comunicación en lengua, arraigo territorial y organización comunitaria (Mendoza, 2015, pp. 142-148; Manjarrez, 2023, pp. 3-9). En la Amazonía ecuatoriana, La Voz de la CONFENIAE enlaza once nacionalidades indígenas y organiza comunicación bidireccional y continuidad política (Tapia, Simpson y Smith-Morris, 2024, pp. 2-9; Tapia Arias, Benavides, Simpson y Smith-Morris, 2024, pp. 193-201). En ambos casos, lo común gana visibilidad normativa, pero permanece económicamente precario.

En Brasil y Colombia predomina otra configuración: la comunización sobrevive dentro de mercados hostiles o plataformas dominantes. En Brasil, experiencias como el colectivo de entregas Señoritas Courier del movimiento LGBTQIA+ o las iniciativas tecnológicas ligadas al Movimiento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) muestran cooperación obrera y propiedad colectiva, pero sin compras públicas, crédito ni apoyo técnico suficientes (Salvagni, Grohmann y Matos, 2022, pp. 455-462; Grohmann, 2023, pp. 276-280). En Bogotá, Drivers Club reveló durante la pandemia formas de ayuda mutua y autogobierno que el marco estatal no reconoce como base legítima de organización del servicio (Paredes y Vigiola, 2024, pp. 1-6). Aquí lo común no está prohibido, está empujado a existir en condiciones que lo vuelven inventivo y, a la vez, frágil y reabsorbible.

Uruguay y Perú fijan, por su parte, los extremos del continuo. En Uruguay, cooperativas como Nuevo Amanecer o La Colonia muestran que propiedad colectiva, trabajo compartido, topes al lucro y asistencia técnica regulada pueden dar densidad normativa a la ayuda mutua (Valitutto y De Souza Lopez, 2024, pp. 623-634). En Tayacaja, en cambio, la falta de electricidad, conectividad robusta, formación docente y continuidad institucional bloquea la traducción de las tramas comunitarias en control colectivo de la infraestructura digital (Mescua Figueroa, Vértiz-Osores, Mendoza Torres y Peceros Mescua, 2024, pp. 116-130; 173-185).

La comparación deja así un saldo más preciso que la simple oposición entre captura y resistencia: la cuestión no es si el Estado está dentro o fuera del problema, sino qué forma adopta, qué deja vivir, qué precariza y bajo qué condiciones ciertas prácticas de comunización pueden dejar de ser mera supervivencia social para convertirse en principio de organización de la reproducción de la vida humana y no humana.

La redención por los comunes

El artículo deja un saldo menos crédulo que el de las celebraciones tecnológicas y menos derrotista que el de ciertas críticas estructurales. La expansión contemporánea de las tecnologías digitales no designa una innovación neutral ni una simple modernización estatal: nombra una nueva fase de capitalización de la vida social, en la que trabajo, comunicación, cuidado, movilidad, memoria, territorio y cooperación son convertidos en flujos registrables, calculables y clasificables. En América Latina, esa captura se despliega sobre economías dependientes, infraestructuras desiguales y soberanías ya atravesadas por plataformas, nube corporativa, seguridad algorítmica y marcos regulatorios que estabilizan la subordinación.

Pero la captura no opera sola. Requiere mediaciones jurídico-políticas e infraestructurales que la vuelvan estable, legítima y administrable. Por eso el nivel decisivo del análisis fue el de la selectividad estatal: la forma desigual en que normas, instituciones, diseños regulatorios, compras públicas, asistencia técnica, espectro, propiedad, financiamiento e infraestructura básica habilitan unas prácticas y sofocan otras. Desde aquí, el Estado deja de aparecer como exterior al problema o como solución garantizada, y se revela como terreno de condensación de la disputa.

Entonces se impone también la corrección de un doble error: el fetichismo jurídico, que cree que los comunes empiezan cuando la ley los nombra, y el espontaneísmo, que supone que toda práctica cooperativa contiene por sí sola una alternativa durable. La cuestión central no es, entonces, si los comunes existen, sino bajo qué condiciones pueden dejar de ser mera supervivencia social y convertirse en principio de organización de la vida colectiva.

La respuesta no pasa por oponer comunidad y Estado, ni por pedir un mercado algo más inclusivo, ni por confiar en que la innovación técnica corregirá sus propios estragos. Exige mediaciones jurídico-políticas orientadas por otros valores: control colectivo de infraestructura y datos, reserva efectiva de espectro, financiamiento no especulativo, apoyo público a tecnologías de propiedad colectiva, derechos de asociación digital, asistencia técnica que acompañe sin desplazar y garantías materiales de conectividad, energía y formación. Los casos revisados muestran, en suma, que la comunización no desaparece bajo la captura, aunque sin forma institucional adecuada pueda quedar confinada a la precariedad o ser reabsorbida por ella.

La disputa decisiva no enfrenta tecnología y atraso, ni Estado y sociedad, sino dos modos de ordenar la vida: uno que la convierte en insumo permanente de valorización y otro que parte de su interdependencia para organizarla como condición compartida de existencia. En esa tensión se juega hoy, también en América Latina, no solo el futuro de lo digital, sino la forma misma de lo vivible.

Referencias

Fuentes primarias

- Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (2024). *La Comisión Europea ratifica el nivel adecuado de Uruguay para la protección de datos*. Montevideo: AGESIC.
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (2025a). *Nube-Mx*. Ciudad de México: Gobierno de México.

- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (2025b). *Sobre la Agencia*. Ciudad de México: Gobierno de México.
- Agência Nacional de Telecomunicações (2026). *Parceria com o Serpro vai ampliar uso de dados e inteligência artificial em nuvem pela Anatel*. Brasília: Anatel.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2024). *The impact of digital surveillance on freedom of expression in the Americas*. Washington, D. C.: Organization of American States.
- Derechos Digitales (2024). *In focus: Security and main digital threats in Latin America*. Santiago de Chile: Derechos Digitales.
- Gobierno del Ecuador (2023). *Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual*. Quito: Gobierno del Ecuador.
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2025). *Política pública para la transformación digital del Ecuador 2025-2030*. Quito: MINTEL.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2025). *Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI*. Bogotá: MinTIC.
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (2025). *Gestão, Serpro e Dataprev lançam serviços de nuvem de governo para órgãos federais*. Brasília: Governo Federal do Brasil.
- OCDE/BID (2024). *2023 OECD/IDB Digital Government Index of Latin America and the Caribbean. Results and key findings*. Paris/Washington, D. C.: Organisation for Economic Co-operation and Development / Inter-American Development Bank.
- OECD (2025). *Competition in the provision of cloud computing services*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Omdia (2025). *Global cloud infrastructure spending rose 21% in Q1 2025*. London: Omdia.
- Presidencia de la República (2025). *Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030*. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.
- Presidencia del Consejo de Ministros (2025a). *Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)*. Lima: Gobierno del Perú.
- Presidencia del Consejo de Ministros (2025b). *Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 002-2025-PCM/SGTD*. Lima: Gobierno del Perú.
- Trump Vance Inaugural Committee (2025). *Report of donations accepted*. Washington, D. C.: Federal Election Commission.

- United States Trade Representative (2020). *United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 19: Digital trade*. Washington, D. C.: Office of the United States Trade Representative.
- United States Trade Representative (2025). *2025 National Trade Estimate report on foreign trade barriers*. Washington, D. C.: Office of the United States Trade Representative.
- Xinhua (2025). *Xi urges healthy, high-quality development of private sector*. Beijing: Xinhua News Agency.

Fuentes secundarias

- Anckar, Carsten (2008). On the applicability of the most similar systems design and the most different systems design in comparative research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(5), 389-401.
- Brodie, Patrick (2023). Data infrastructure studies on an unequal planet. *Big Data & Society*, 10(1), 1-14.
- Couldry, Nick y Mejías, Ulises A. (2019). *The costs of connection. How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford: Stanford University Press.
- Duménil, Gérard y Lévy, Dominique (2011). *The crisis of neoliberalism*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Greckhamer, Thomas; Furnari, Santi; Fiss, Peer C. y Aguilera, Ruth V. (2018). Studying configurations with qualitative comparative analysis: Best practices in strategy and organization research. *Strategic Organization*, 16(4), 482-495.
- Grohmann, Rafael (2023). Not just platform, nor cooperatives: Worker-owned technologies from below. *Communication, Culture & Critique*, 16(4), 274-282.
- Grohmann, Rafael (2025). Labor-atories of Digital Economies: Latin America as a Site of Struggles and Experimentation. *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, 5(1).
- Guerra González, Jenny Teresita; Suárez Estrada, Marcela y Cerratto-Pargman, Teresa (2022). Construyendo soberanía digital en América Latina: un análisis de las iniciativas de cuatro colectivos sociales. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 149, 227-242.
- Harvey, David (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Iliadis, Andrew y Acker, Amelia (2022). The seer and the seen: Surveying Palantir's surveillance platform. *The Information Society*, 38(5), 334-363.

- Kotliar, Dan M. y Gekker, Alex (2024). Migrating the state into corporate clouds. *Information, Communication & Society*, 27(14), 2566-2586.
- Lehuedé, Sebastián (2024). An alternative planetary future? Digital sovereignty frameworks and the decolonial option. *Big Data & Society*, 11(1), 1-13.
- Manjarrez, Laura Elizabeth (2023). Towards pluriversal views of digital technologies: the experiences of community and indigenous radios in Chiapas, Mexico. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 6(1), artículo 2254629.
- Mendoza, Sergio Marcos (2015). Expansión y presencia de la radio libre en Chiapas, un fenómeno de la globalización. *Razón y Palabra*, 19(1_89), 139-156.
- Mejías, Ulises A. y Couldry, Nick (2019). Colonialismo de datos: repensando la relación de los datos masivos con el sujeto contemporáneo. *Virtualis*, 10(18), 78-97.
- Mescua Figueroa, Augusto César; Vértiz-Osores, Ricardo Iván; Mendoza Torres, Christian Paulina y Peceros Mescua, Keith Eduardo (2024). Digital inclusion policies in a high Andean Quechua region of Peru. *Ciencia ergo-sum*, 31(1), artículo e225.
- Paredes, Luis Hernando Lozano y Vigiola, Gabriela Quintana (2024). Microspheres of self-governance: Platform communities in times of need in Bogotá, Colombia. *Cities*, 153, artículo 105311.
- Ricaurte, Paola; Gómez-Cruz, Edgar y Siles, Ignacio (2024). Algorithmic governmentality in Latin America: Sociotechnical imaginaries, neocolonial soft power, and authoritarianism. *Big Data & Society*, 11(1).
- Rosa, Fernanda R. (2023). From community networks to shared networks: the paths of Latin-Centric Indigenous networks to a pluriversal internet. *Information, Communication & Society*, 26(14), 2856-2872.
- Rouvroy, Antoinette y Berns, Thomas (2013). Gouvernamentalité algorithmique et perspectives d'émancipation. Le disparate comme condition d'individuation par la relation? *Réseaux*, 177(1), 163-196.
- Salvagni, Julice; Grohmann, Rafael y Matos, Évilin (2022). Gendering platform co-operativism: the rise of women-owned rider co-operatives in Brazil and Spain. *Gender & Development*, 30(3), 451-467.
- Tapia, Andrés; Simpson, Nicholas y Smith-Morris, Carolyn (2024). Assessing Indigenous Community Radio as Two-Way

- Communications Infrastructure: Communal Engagement and Political Mobilization in Ecuador. *Societies*, 14(8), artículo 156.
- Tapia Arias, Andrés; Benavides, Cristina; Simpson, Nicholas y Smith-Morris, Carolyn (2024). Referencias históricas y preferencias de audiencia de la programación de la radio La Voz de la CONFENIAE. *Suplemento CICA Multidisciplinario*, 8(17), 193-219.
- Ulbricht, Lena y Egbert, Simon (2024). In Palantir we trust? Regulation of data analysis platforms in public security. *Big Data & Society*, 11(3), 1-15.
- Valitutto, Irene y De Souza Lopez, Ignacio (2024). Technical teams as commoning gatekeepers: The case of IATs in Mutual Aid Housing Cooperatives in Uruguay. *International Journal of the Commons*, 18(1), 618-634.
- Vega Solís, Cristina (2019). Reproducción social y cuidados en la reinención de lo común. Aportes conceptuales y analíticos desde los feminismos. *Revista de Estudios Sociales*, 70, 49-63.